

SEBASTIAAN FABER:

“En las batallas por la memoria, España es menos excepcional de lo que se piensa”

FRANCISCO MARTÍNEZ HOYOS

DOCTOR EN HISTORIA



UN DEBATE NECESARIO

La historia, lo mismo en España que en otros países, es objeto de enconadas controversias. En nuestro caso, no somos capaces de alcanzar un mínimo consenso sobre temas tan candentes como la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo o la Transición. El holandés Sebastiaan Faber, catedrático de Estudios Hispánicos en el Oberlin College (Ohio, Estados Unidos), es un reconocido especialista en nuestro pasado reciente. En su nuevo estudio, *Franco desenterrado* (Pasado & Presente, 2022), ha reunido a una amplia gama de entrevistados, todos figuras importantes en el mundo del periodismo y la cultura, que reflejan la riqueza y pluralidad del debate actual.

Los desacuerdos saltan a la vista en el volumen de Faber. Si, para unos entrevistados, la sombra de la dictadura sigue todavía vigente, otros apuntan que es un error denominar “franquismo” a todo lo que nos parece reprochable. Detrás de las respectivas opiniones hay una posición, en una controversia ya vieja, acerca de si es cierto o no que “Spain is different”. Las posturas aquí son tan

antagónicas que parece mentira que todos los protagonistas estén hablando del mismo lugar: ¿una nación plenamente incorporada a la modernidad europea o una democracia adulterada por las huellas de un fascismo presente aún en tentáculos como el poder económico o la judicatura? La polémica, en cualquier caso, excede el ámbito académico. La gran cuestión es dilucidar hasta qué punto necesitamos una segunda transición que sea capaz de

cicatrizarse las heridas abiertas y solucionar nuestros problemas más acuciantes.

En sus entrevistas se encuentra un amplio abanico de posturas, en ocasiones contrapuestas. ¿Se trata de la misma guerra por la interpretación del pasado que encontramos en otros países? ¿Hay rasgos distintivos?

Es verdad que hay importantes desacuerdos entre las tres docenas de personas



que he entrevistado para el libro. Pero más que diferencias de opinión sobre el pasado como tal, me parece que se trata de diferencias de visión sobre el presente español y su relación con el pasado. Para algunos, por ejemplo, el franquismo sigue pesando mucho, y su legado persistente sirve para explicar muchas de las disfunciones que sufre España hoy. Otros reconocen que hay disfunciones, pero no creen que estas sean explicables a través del franquismo, bien porque son más antiguas que él, bien porque son fenómenos más recientes y no limitados a España. Con respecto a las guerras por la interpretación del pasado—lo que en otro lugar he llamado las “batallas por la memoria”—, España es menos excepcional de lo que a veces se piensa. Son muchos los países en que se ha empezado a cuestionar, desde la derecha y ultraderecha, la idea de que es bueno leer, narrar e investigar el pasado de la propia nación con ojo crítico.

En muchos casos, se acusa a unas supuestas “élites políticamente correctas” de socavar la fe y el orgullo nacionales mediante relatos que enfatizan—según la derecha, de forma exagerada— los capítulos más oscuros del pasado nacional.

En su libro señala que muchos españoles, al reflexionar sobre su país, se inspiran en una visión idealizada de ciertas naciones europeas. ¿Podríamos decir que se compara lo peor de España con lo mejor del extranjero?

En efecto, creo que a veces es lo que ocurre. Como explico en el libro, puede ser una táctica política—generalmente bastante efectiva— señalar deficiencias o problemas en el ámbito doméstico mediante una comparación con otro país en el que, supuestamente, esas deficiencias no se dan, o no tanto. En Estados Unidos, desde la izquierda se invocan mucho las socialdemocracias europeas para denun-

ciar la falta de cobertura sanitaria norteamericana, por ejemplo. En España, la comparación con los países del norte ha servido para denunciar temas varios, que van desde la corrupción política—y el hecho de que los corruptos casi nunca dimitan— hasta la memoria histórica. Ahora bien, me parece que, dada la inversión emocional en la idea de la normalidad europea, en España ha sido fácil que esta táctica se petrifique en un patrón de interpretación que exagera de forma estructural la diferencia española.

Se dice que el hecho de que Franco muriera en la cama marcaría un hecho diferencial con otros países. Pero Italia, Alemania o Francia no se liberaron del fascismo por sí mismos. Solo lo consiguieron gracias a los ejércitos aliados, que, sin embargo, no quisieron intervenir en España. ¿No sería esta la auténtica diferencia?

Claro que es una diferencia importante, aunque esa misma diferencia es menos pronunciada si incluimos los casos de Portugal o Grecia. Por otra parte, es complicado establecer cuáles o quiénes fueron los agentes que acabaron con los fascismos europeos, ya que en casi todas partes hubo colaboración y resistencia. Me parece más importante destacar que, inmediatamente o con el tiempo, gran parte de la Europa de la posguerra asumió el antifascismo como fundamento democrático, tanto entre la izquierda como en la derecha. Fue una postura ética que tuvo efectos reales, duraderos, en el código penal, la educación, la vida política, los medios, el tejido social y la sociedad civil. Aunque, en más de un país europeo, algunos de los legados de ese consenso de la posguerra se están cuestionando hoy, sobre todo desde la ultraderecha, en la España posfranquista, ese consenso nunca se dio.

Cuando se habla de nacionalismo español, se piensa en la derecha o la ultraderecha. Sin embargo, todos los grandes dirigentes de la Segunda República, como Azaña, Prieto o Negrín, eran claramente patriotas. Si esto así, ¿por qué parece que la idea de España no tiene relación con la izquierda?

El nacionalismo español explícito, militante –de bandera e himno–, tuvo mala prensa durante cierto tiempo, ya que se asociaba, ante todo, con el franquismo. Pero siempre ha habido un nacionalismo español de izquierdas también. Durante la Guerra Civil, la República se identificaba explícitamente con la defensa de la verdadera España. Ese discurso se mantiene en el exilio para denunciar al régimen franquista como ilegítimo.

En el año 2019, Franco fue exhumado del Valle de los Caídos con el beneplácito del Tribunal Supremo. ¿Cómo es esto posible si, como se dice, tenemos una justicia franquista?

La presencia en la judicatura española de legados franquistas no entra en contradicción con esa decisión del Supremo. Se trata de patrones y reflejos más sutiles: cómo el poder judicial concibe su relación con el legislativo, cómo está tentado a autoconsiderarse defensor o salvador de

Desfile de las tropas estadounidenses en los Campos Elíseos de París, el 29 de agosto de 1944, para celebrar la liberación de la ciudad.

En la pág. anterior, un helicóptero sobrevuela el Valle de los Caídos durante la exhumación de Franco en 2019.



la nación, cómo interpreta la ley, cómo asume la continuidad jurídica con el franquismo, cómo comprende –o no– la diversidad social de la España actual.

¿Cómo se explica que el legado franquista sea tan fuerte y, al mismo tiempo, seamos un país de vanguardia en cuestiones como el derecho al aborto o los derechos de la comunidad LGTBI? Es una de las preguntas que más divididos tiene a mis entrevistados. Para los que mantienen la tesis de que España sigue lastrada por los legados del franquismo, la respuesta sería que estos se manifiestan de forma más subrepticia. Por ejemplo, en cómo se concibe y practica la política, no solo desde la derecha, sino también desde la izquierda.

El fascismo es un tipo de dictadura, pero no todas las dictaduras son fascistas. ¿No le parece que, al definir el

fascismo en términos demasiado generales, corremos el peligro de no verlo que tiene de específico, de confundirlo con otros sistemas antidemocráticos? Me explicaré de otro modo: es cierto que el fascismo no pensaba en adversarios políticos, sino en enemigos. Pero Lenin hacía lo mismo y eso no lo convertía en un fascista...

Definir las cosas de forma demasiado general siempre conlleva el riesgo de minimizar sus especificidades. De hecho, en el libro no me meto en debates de ese tipo, que, estoy de acuerdo, suelen ser poco productivos o interesantes.

Decía un poeta del XIX que si alguien habla mal de Prusia es un francés y si habla mal de España es español. ¿Exageramos o no en la autocrítica? Sí y no. A veces me parece que se exagera en la autocrítica –hasta el fatalismo–, pero en otros momentos, quizá para

compensar, se exagera en dirección contraria, como en las campañas de los últimos años para promover la imagen de España en el exterior. Otro tema es cómo se asumen las visiones críticas que puedan llegar del exterior. Hay opinadores patrios muy críticos con España –con sus propios exabruptos fatalistas– a los que, sin embargo, les cuesta aceptar visiones críticas cuando las formulan hispanistas y otros analistas extranjeros.

Las heridas de la Guerra Civil no acaban de cicatrizar. En EE. UU., mientras tanto, todavía se idealiza al sur, como si no hubiera sido esclavista, y se polemiza sobre monumentos a generales sudistas como Lee. ¿Por qué tendríamos que solucionar los españoles en ochenta años lo que otros no han arreglado en el doble de tiempo?

Que tu vecino no riegue sus plantas, ¿significa que tengas que dejar morir las tu-

yas? Yo soy de la opinión de que es bueno para la salud democrática asumir el pasado con actitud rigurosa y crítica. El debate sobre el relato del pasado –que incluye, claro está, su presencia en los espacios públicos en forma de monumentos o museos– es esencial para toda democracia. Son debates, además, en los que deben poder participar todas y todos los ciudadanos que lo deseen. El hecho de que las batallas de la memoria se den en muchas partes no es motivo para minimizar su importancia en España. Sí significa que los países pueden aprender cosas el uno del otro. No es casual que en las últimas décadas hayamos visto la internacionalización no solo de los estudios de la memoria y los estudios museísticos, sino también de los análisis y las prácticas de las transiciones democráticas.

¿Quién debe establecer lo que fue el pasado? ¿La justicia o los historiado-

res? ¿Existe el peligro de crear una historia oficial de izquierdas que, como todas las historias oficiales, se acabe convirtiendo en un dogma?

En una democracia, es normal que coexistan relatos diferentes sobre el pasado. Contarlos no es una tarea que se pueda delegar en el gobierno, pero tampoco se puede limitar a un gremio determinado, como lo es el de las y los historiadores profesionales. Por más entrenados que estén los historiadores académicos, y por más disciplinados que sean, son ciudadanos y seres sociales e históricos, con su ideología, intereses, prejuicios y dependencias de estructuras institucionales. Otra pregunta es cuál es o debería ser el papel del Estado. Aquí me parece persuasivo el planteamiento de Ricard Vinyes. Por una parte, al Estado no le incumbe legislar directamente sobre el pasado; no conviene que imponga un relato u otro. Pero esto no significa que no tenga responsabilidad con respecto al tema de la memoria, todo lo contrario. Al Estado le corresponde no solo fomentar la investigación y la educación sobre el pasado colectivo, sino también garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en los debates e intercambios sobre el tema. En una democracia, además, es normal y deseable que los monumentos, los museos, los espacios públicos y los programas educativos reflejen los valores democráticos consensuados.

La Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho. Eso es progresista. Sin embargo, ahora parece que ser constitucionalista sea ser de derechas. ¿Cómo hemos llegado a esto?

Respondería, coincidiendo con Guillem Martínez, que lo que se ha venido en llamar “constitucionalismo” en España, estos últimos años, poco tiene que ver con la Constitución tal y como está escrita. En el mejor de los casos, parte de una lectura oportunista e interesada del documento y sus intenciones. En el peor, va en contra de los valores que encarna.

La Ley de memoria histórica se identifica con el progresismo. Pero un historiador de claras credenciales anti-franquistas, como el catalán Josep

Abajo, Adolfo Suárez y Felipe González, personajes clave de la Transición y la apertura de España.

A la dcha., unos voluntarios buscan los restos de una víctima de la Guerra Civil en Guadalajara.



Benet, se pronunció en contra. A su vez, Santos Juliá expresó también discrepancias. ¿Cómo explicar esta falta de consenso en la misma izquierda? Es importante comprender que la ley de 2007 suscitó, desde la izquierda, críticas de distintos tipos. Para algunos, la ley iba demasiado lejos. Para otros, se quedaba corta. Y otros más creían que una ley no era el instrumento adecuado para lograr los objetivos que sus promulgadores se proponían. Fue el caso de algunos historiadores, como el mismo Juliá, gran historiador, que partía de una distinción conceptual tajante entre “memoria” e “historia”, y creía que el Estado no tiene por qué meterse en ninguna de las dos. A mí me parecen más convincentes las posturas de otros y otros historiadores, como Pablo Sánchez León, Noelia Adánez, Jesús Izquierdo o el propio Ricard Vinyes, que ofrecen visiones más matizadas –y, en última instancia, más productivas–

sobre la relación entre historia profesional, memoria ciudadana y Estado. La Ley de memoria democrática, que en estos momentos se está tramitando, también ha venido recibiendo una recepción bastante mixta entre la izquierda. Es normal: al fin y al cabo, se trata de un tema de una gran complejidad –tanto práctica como teórica– y hay muchos intereses en juego, además de inversiones afectivas y políticas. La izquierda nunca ha sido monolítica. Más preocupante me parece la actitud de la derecha –mediática y parlamentaria–, que no parece haber evolucionado un ápice desde 2007 y sigue empuñada en una actitud de obstrucción.

Es obvio que la derecha española se ha negado a condenar el franquismo. Sin embargo, la izquierda no se ha mostrado demasiado enérgica con matanzas como la de Paracuellos. ¿No sería mejor condenar toda la violencia,

venga de donde venga? ¿No parece que las víctimas solo son importantes si se pueden instrumentalizar al servicio de un discurso político, sea este el que sea?

Estoy de acuerdo en que queda trabajo por hacer en torno a la violencia perpetrada por individuos y grupos asociados con la izquierda en los años treinta. Pero ese trabajo no creo que consista en una simple condena de “toda la violencia, venga de donde venga”. Como tampoco creo que tenga mucho sentido honrar por igual a toda víctima, sea quien sea. Partir de una equiparación de todas las violencias y todas las víctimas es profundamente ahistórico. Descontextualizar a las víctimas de esa forma es, precisamente, lo que facilita su instrumentalización al servicio de los discursos políticos.

Se dice que la polémica en torno al rey Juan Carlos, en otros países, habría

llevado al fin de la monarquía. Pero, en la Holanda de los años setenta, el príncipe Bernardo aceptó un soborno de una gran compañía, y la institución permanece. ¿Qué similitudes o diferencias percibe entre estas polémicas? Es verdad que otras monarquías parlamentarias también han gozado de protecciones y privilegios de parte de la clase política y de los grandes medios de comunicación. En Holanda, el escándalo en torno al marido de la reina Juliana fue importante, y sin duda desprestigió a la institución, pero esta resistió. Ahora bien, creo que hay dos grandes diferencias con el caso del rey emérito. Primero, en Holanda se trataba del marido de la reina, no de la propia monarca. Segundo, los tiempos han cambiado. Hoy no creo que la monarquía holandesa pudiera sobrevivir a un escándalo de corrupción como el que se ha dado en España, que afecta –directa, personalmente– al rey Juan

Carlos. Ni tampoco la sociedad holandesa aceptaría hoy una interpretación de la inviolabilidad real tan generosa como ha adoptado la Fiscalía española.

Primero se dijo que la Transición era una maravilla, después que fue un desastre. ¿No sería más maduro plantear que tuvo luces y sombras?

Claro que tiene más sentido plantear que tuvo luces y sombras. El relato triunfalista que dominó en las primeras décadas después de la muerte de Franco necesitaba un correctivo –un correctivo que, dicho sea de paso, las élites políticas e intelectuales, imbuidas de triunfalismo, se negaron a asumir durante mucho tiempo–. Pero, a la larga, no es productivo partir de una lectura puramente negativa de lo que se logró en esos años.

Tanto en la izquierda como en la derecha, muchos planteamientos tienen

que ver con la defensa de familiares que fueron víctimas. ¿No introduce esto un factor emocional que hace difícil que seamos objetivos?

No estoy seguro de que la objetividad, como tal, sea una aspiración útil en este contexto. Sí estoy de acuerdo en que el factor emocional –yo prefiero el término “afectivo”– ha tenido un papel importante en el debate en torno a la memoria histórica. Por un lado, es inevitable, y hay que reconocer y valorar el peso de las emociones y de la afectividad, como lo han hecho muchos teóricos de la memoria. Por otro lado, creo que un exceso de afectividad puede limitar el margen de movimiento en los debates políticos. En algún momento, los dirigentes políticos, tanto como los ciudadanos, tendrán que ser capaces de conversar sobre el pasado y su lugar en el presente, y llegar a ciertos consensos básicos, sin dejarse dominar por completo por ese peso afectivo, que, como bien indica, es muchas veces también un peso genealógico.

El franquismo instituyó una educación antidemocrática y no consiguió convencer a todos los españoles para que se adhirieran a sus principios. Si ahora introducimos valores democráticos en la escuela, ¿no corremos el peligro de que los jóvenes, por reacción, se reboten? ¿Por qué tendría que ser la educación democrática más efectiva que la franquista a la hora de establecer un determinado imaginario?

Soy el primero en reconocer los límites del sistema educativo. Los que trabajamos como profesores, quizá tendemos a sobrevalorar nuestro poder y el impacto de nuestras instituciones. Tal vez ocurre lo mismo en la clase política, vista la intensidad con que se debaten los contenidos curriculares. Ahora bien, todos los que hemos pasado por un sistema educativo determinado, o tenemos hijas o hijos en edad escolar, sabemos muy bien que algo siempre influye. Una visita a un antiguo campo de concentración, como se acostumbra hacer en Alemania, sin duda, sirve para que los alumnos comprendan mejor la realidad del nazismo. Los valores democráticos no solo quedan reflejados en el temario, sino en la didáctica empleada y en el ambiente del aula. ●